

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 24° Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-18417-2019

**CARATULADO : DEL PERO//ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA.**

Santiago, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 5 de junio de 2019, complementada el 17 de junio del mismo año, don Manuel Luna Abarza, abogado, en representación de doña **Jenny del Carmen del Pero Espinoza**, arquitecto, domiciliada en calle Berta Correa N°1791, casa 83, comuna de Huechuraba, deduce demanda de indemnización de perjuicios, en juicio sumario, en contra de **Ilustre Municipalidad de Huechuraba**, corporación autónoma de Derecho Público, representada por su alcalde don Carlos Cuadrado Prats, ambos domiciliados en Av. Recoleta N°5680, comuna de Huechuraba, pretendiendo se tenga por deducida la demanda de indemnización de daños y perjuicios, por la suma de \$20.900.000, o la suma que el tribunal estime en derecho, más intereses, reajustes y con costas.



Sustenta su pretensión en que en que la actora habría solicitado y obtenido el otorgamiento de patente comercial de la municipalidad demandada, Rol N°281229, para el desarrollo de la actividad de Servicios de Estética integral, que incluye manicure y pedicura, labor a desplegarse en una parte del primer piso de su casa habitación, ubicada en Condominio Hacienda de Huechuraba 6, actividad que habría iniciado luego de su separación con el padre de sus dos hijos y para afrontar el pago de deudas, incluida la de su vivienda, habiendo efectuado la solicitud el 25 de enero de 2018, al amparo de la Ley N°19.749, que facilita la creación de microempresas familiares, a la cual se habría adjuntado, entre otros documentos, la autorización conferida por el respectivo Comité de Administración del condominio aludido, ocurriendo que, días después, el citado municipio habría efectuado las acciones para acreditar la concurrencia de los antecedentes habitantes, entre ellos, la visita al inmueble, otorgándose la patente definitiva, y mediante ingreso municipal N°42639, de 13 de marzo de 2018, se hizo el pago de la misma, cuyo valor fraccionado, correspondía a un total de \$65.870.-

Indica que se habrían ejecutado, desde el 30 de marzo de 2018, labores comerciales autorizadas, asumiendo, también, la contratación de una trabajadora, para los servicios amparados en el giro, ocurriendo, sin embargo, que con fecha 10 de mayo de 2018, mediante Resolución municipal contenida en carta N°375/2018, suscrita por doña Julia Tihista Sánchez, jefa del



Departamento de Patentes de la Municipalidad de Huechuraba, se decretó intempestivamente, la revocación de la patente comercial de su microempresa, que había sido otorgada para todo el año 2018, en forma arbitraria y con efecto inmediato.

Relata que tal decisión se fundó en que la municipalidad, a pesar de haber recibido y verificado los antecedentes y sin escucharla, reconsideró o reestudió tales antecedentes, recalificando su procedencia, estimando que no se cumplían las exigencias legales, estableciendo hechos sobrevinientes que la harían improcedente, todo ello sin ajustarse a la normativa legal aplicable, ante lo cual debió su parte dejar de atender público y ejercer su actividad, a contar del 10 de mayo.

Señala que hizo una petición, tanto al alcalde como al Concejo Municipal, quienes no revirtieron la decisión, presentando luego, una reclamación de ilegalidad ante el alcalde, quien no la habría acogido, continuando el reclamo ante la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago, la que, en definitiva, lo habría acogido mediante sentencia de 23 de octubre de 2018, cuyo texto reproduce en parte en su libelo.

Alega que solo a través de la acción judicial habría podido poner término a la arbitrariedad cometida por la demandada, pero en el tiempo que estuvo suspendida no pudo ejercer la actividad, generándose perjuicios para ella.

Precisa haber padecido como lucro cesante, la pérdida de los ingresos mensuales, por el periodo que no pudo ejercer su



actividad, siete meses, ya que pudo abrir recién, el 8 de enero de 2019, habiendo percibido solo por el periodo del 30 de marzo al 29 de abril de 2018, un total de \$1.914.080, ajustado a la cantidad de \$1.700.000 promedio por mes, lo que arrojaría un total de \$11.900.000 como pérdida.

Indica que habría padecido como daño directo, el costo de adquisición de nuevos insumos y artículos, como también, por los arreglos en el espacio del salón, por un total de \$2.000.000; como también, un daño moral, por haber visto interrumpida su actividad en un periodo de crisis financiera, obligándola a ejercer acciones tanto en Juzgado de Policía Local como una acción constitucional, lo que avalúa en la suma de \$7.000.000.-

Invoca para su pretensión, lo previsto en los artículos 1, inciso cuarto, 6, 7, 38 inciso segundo, de la Constitución Política de la República; 4 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado; 151 y 152 de la Ley N°183695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, todas las cuales hacen responsable a los órganos del Estado por los daños que causen a los particulares, en particular, por falta de servicio, entendiendo ésta como una mala organización o funcionamiento de la administración, quedando de manifiesto la actuación ilegal del municipio al tenor del fallo judicial ya aludido.

Con fecha 30 de julio de 2019, se llevó a cabo el comparendo de estilo, contestando la demandada según minuta agregada al expediente digital con fecha 29 de julio de 2019, en folio 12, en la cual pide el rechazo de la demanda, con costas,



fundando ello en que, siendo efectivo que la actora obtuvo patente comercial, Rol N°281229, otorgada el 9 de abril de 2018, según Resolución N°126/2018, habría ocurrido que en el proceso de otorgamiento se habría presentado entre los documentos, una autorización emitida y firmada por don Alonso Mendoza S., en calidad de Administrador del Condominio Hacienda de Huechuraba 6, fechada en enero de 2018, es decir, de un órgano unipersonal, no del Comité de Administración, vulnerándose con ello el artículo 26 del Decreto Ley N°3063 sobre Rentas Municipales, en relación con la Ley N°19.749 que regla la Microempresa Familiar.

Señala que, por dicha razón, su parte habría informado mediante carta N°375/2018, de 10 de mayo de 2018, la revocación de la patente comercial, al existir un vicio en el otorgamiento de la patente comercial.

Reconoce que la actora ejerció acciones tendientes a revertir la decisión de su parte, interponiendo recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Ingreso Corte N°283-2018, donde se acogió dejar sin efecto, solamente, el Oficio N°1201/51/2018, de 26 de junio de 2018 de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Huechuraba, que rechazó el reclamo dirigido en contra de la carta N°375/2018 de la Jefa de Patentes que revocaba la patente comercial otorgada a la contribuyente, dejando sin efecto tal decisión, quedando ejecutoriada la sentencia con fecha 15 de noviembre de 2018.



Alega que siempre ha sido responsabilidad de la contraria cumplir con los requisitos que la ley impone para el otorgamiento de patente comercial, en particular obtener el permiso del Comité de Administración del condominio, no pudiendo pretender ella haber tenido un derecho adquirido con el otorgamiento de la patente, toda vez que se llevó a cabo con un vicio que afectaba la validez del acto, ordenándose por la Corte de Apelaciones de Santiago, proceder a tramitar con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 13 y 53 de la Ley N°19.880, lo concerniente a la patente otorgada a la actora.

Relata que el proceso administrativo iniciado, en la actualidad, tiene por objeto invalidar la patente comercial, por carecer de uno de los requisitos de validez para su otorgamiento, a menos que la actora acredite contar en dicha instancia, que cuenta con el citado requisito de validez, a través de la autorización del Comité de Administración del Condominio.

Reclama que la actora carecería de fundamento plausible para demandar perjuicios, en razón que su eventual derecho nacería, recién, una vez resuelto el procedimiento administrativo que invalide o no su patente comercial.

En subsidio de lo anterior, expresa como defensa que la actora jamás habría dejado de ejercer su actividad, ya que indica en su demanda ingresos percibidos por el periodo de 30 de marzo de 2018 al 29 de abril de 2019, no pudiendo determinarse cuáles serían los 7 meses en que no pudo ejercer su actividad, no pudiendo existir lucro cesante.



Indica que, respecto del daño directo demandado, no se aprecia su fundamento, por el mismo hecho de haber seguido ejerciendo su actividad, además, que toda actividad tiene aparejado un gasto, en el caso, de insumos y artículos propios del ejercicio de la misma, los que no pueden imputarse a su parte, menos, los arreglos en el espacio del salón, que obedecen a una decisión propia de la demandante y corresponde a un gasto de su actividad. Agrega que tal daño no parece cierto, ni justificado.

Objeta el daño moral demandado, por haber seguido su actividad la actora y porque en las acciones ejercidas por la contraria en Policial Local y constitucional, no fue parte, no pudiendo imputarse a ella un daño extra patrimonial por esas causas, ni menos podría tener responsabilidad su parte en la crisis financiera sufrida por la actora. Agrega que el daño moral debe ser cierto, subsistir o permanecer al momento de la sentencia y de carácter personal, nacido de un interés lícito, debiendo la actora acreditar la existencia del mismo.

Gestionada conciliación, no tuvo resultado positivo.

Con fecha 7 de agosto de 2019, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos.

Con fecha 3 de abril de 2020, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:



PRIMERO: Que la demandante, doña **Jenny del Carmen del Pero Espinoza**, deduce demanda de indemnización de perjuicios, en juicio sumario, en contra de **Ilustre Municipalidad de Huechuraba**, ambas ya individualizadas, pretendiendo se tenga por deducida la demanda de indemnización de daños y perjuicios, por la suma de \$20.900.000, o la suma que el tribunal estime en derecho, más intereses, reajustes y con costas, fundando su pretensión en los argumentos de hecho y fundamentos de derecho ya relatados, latamente, en lo expositivo del presente fallo.

SEGUNDO: Que la demandada, por su lado, pide el rechazo de la demanda, conforme a los argumentos de hecho y de derecho ya descritos, latamente, en la parte expositiva de esta sentencia.

TERCERO: Que han resultado hechos no controvertidos en el proceso, aceptados por ambas partes, las siguientes circunstancias:

1.- Que es efectivo que se otorgó a la actora, con fecha 9 de abril de 2018, la patente comercial Rol N°281229, según Resolución N°126/2018;

2.- Que la demandada remitió a la actora, Carta N°375/2018, de 10 de mayo de 2018, donde informó la revocación de la patente comercial concedida;

3.- Que la actora dedujo un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en Rol Ingreso Corte N°283-



2018, donde se revirtió la decisión administrativa de rechazar el reclamo efectuado por la actora; y

4.- Que la sentencia de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, quedó ejecutoriada con fecha 15 de noviembre de 2018.

CUARTO: Que la discusión esencial del pleito judicial, ha rondado en cuanto a si estaría resuelta o no, la supuesta ilegalidad de la concesión de la patente comercial a la actora; en si la actuación de la demandada habría implicado falta de servicio y si habría sido arbitraria; si se han producido efectivamente los perjuicios demandados; y si la actuación de la demandada habría producido tales perjuicios.

QUINTO: Que, a fin de justificar sus argumentos, la actora rindió la siguiente prueba:

Documental:

- a) Copia de sentencia sobre Reclamo de Ilegalidad, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol IC N°283-2018, de fecha 23 de octubre de 2018, agregada al expediente digital con fecha 5 de junio de 2019, no objetada;
- b) Copia de Orden de Ingreso Municipal N°42639, sobre pago de patente comercial, agregada al expediente digital con fecha 5 de junio de 2019, no objetada;



- c) Copias de boletas de honorarios de la actora, números 1 a 37 y 39 a 173, agregadas al expediente digital con fecha 4 de noviembre de 2019, en folio 20, no objetadas;
- d) Copias de boletas y facturas de distintos bienes y servicios, comprobantes de pago y notas de despacho, agregadas al expediente digital con fecha 4 de noviembre de 2019, en folio 20, no objetadas;
- e) Copia de bonos de atención ambulatoria, y de órdenes de exámenes de la actora, agregadas al expediente digital con fecha 4 de noviembre de 2019, en folio 20, no objetadas;
- f) Copia de Libro Mayor de centro de estética de la actora, de 30 de marzo a 19 de abril de 2018 y de 30 de abril a 27 de mayo de 2018, agregadas al expediente digital con fecha 4 de noviembre de 2019, en folio 21, no objetadas;
- g) Copia de Informe de ingresos emanado de la actora, agregado al expediente digital con fecha 4 de noviembre de 2019, en folio 21, no objetado; Y
- h) Impresión de Carpeta Tributaria Electrónica de la actora, obtenida de página web del Servicio de Impuestos Internos, agregada al expediente digital con fecha 4 de noviembre de 2019, en folio 21, no objetada.

Pericial:



Rendida por el perito contador auditor, don Ernesto Aburto Guarda, quien evacuó su informe y lo agregó al expediente digital, el 10 de febrero de 2020, en folio 36, no objetado, donde concluye haber evidenciado gastos de instalación y puesta en marcha del salón de estética de la actora, por un total de \$4.895.482; que se percibieron ingresos mensuales, del salón de belleza, de \$61.470, en marzo de 2018, de \$1.810.510, en abril de 2018 y de \$1.343.190, en mayo de 2018, siendo el promedio diario de todo ese periodo de \$66.983; que según información contable, el negocio no presenta ingresos, ni gastos en los meses de junio a diciembre de 2018, ambos incluidos; y que tomando el valor promedio diario de venta del periodo anterior, se habría dejado de percibir, por los 7 meses de inactividad, la suma total de \$11.722.025.-

SEXTO: Que, por su parte, la demandada rindió la siguiente prueba para justificar su defensa y desvirtuar los argumentos y prueba de la actora:

Documental:

- a) Copia de Ordinario N°2099/2019, de la Dirección de Operaciones de la Municipalidad de Huechuraba, agregado al expediente digital con fecha 6 de noviembre de 2019, en folio 23, no objetado;
- b) Copia de Decreto Exento N°01/1200/2017, de la Municipalidad de Huechuraba, agregado al expediente



digital con fecha 6 de noviembre de 2019, en folio 23, no objetado;

- c) Copia de Decreto N°35, de 7 de febrero de 1992, de la Municipalidad de Huechuraba, agregado al expediente digital con fecha 6 de noviembre de 2019, en folio 23, no objetado;

Testifical:

Rendida en la audiencia de 6 de noviembre de 2019, folio 25, por la testigo doña Patricia Aguilar Olmos, legalmente examinada y sin tacha, quien declaro:

Que la actora seguiría en funcionamiento de su salón de belleza, lo que sabe por asumir el cargo de administradora del condominio desde enero de 2019; que el salón funciona en el primer piso de la casa 83, donde se prestar servicios de peluquería, pintura de uñas; que cuenta con publicidad en letreros y la puerta siempre está abierta; que ha visto personas atendiéndose; que la casa da hacia la calle Berta Correa; que hasta el día de su declaración estaría abierto, siendo el horario bien extendido; que en su función de administradora habría leído las actas de asamblea del año 2017, donde los vecinos reclamaban que ella abrió el local, a pesar que el Reglamento del Condominio lo prohíbe; que a propósito de reclamos de los vecinos, habría concurrido a la municipalidad, donde le informaron que la patente estaba en regla, concurriendo al departamento jurídico, donde le habrían dicho que estaba en



proceso; que supo del malestar de vecinos por el funcionamiento del salón de belleza, a través de correos electrónicos que habría visto; que la municipalidad no ha impedido a ese local; y que durante el periodo 2018, el administrador en ejercicio habría presentado y realizado diferentes diligencias para cerrar el salón, sin resultado.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, comenzando por los instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones, fundadas en causal legal, respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce pleno valor probatorio a los instrumentos señalados, según su naturaleza, salvo los documentos privados emanados de la propia parte, sin intervención de la contraria y los de terceros que no hayan sido ratificados en juicio, los que, en todo caso, serán considerados como indicios.

Que la testifical rendida por la parte demandada, que ha sido rendida por un solo testigo, legalmente examinado y sin tacha, cuyo conocimiento no ha sido presencial antes de tomar el cargo de administradora de la comunidad, solo sirve para establecer un indicio, en cuanto a que el salón de belleza de la actora, habría seguido funcionando, durante todo el resto del año 2018.



La prueba pericial será apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, según lo previene el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil.

OCTAVO: Que, conforme a los hechos reconocidos por las partes, se deberá verificar, a continuación, si se dan los presupuestos para acceder a la responsabilidad extracontractual de la demandada, por falta de servicio, en particular, si la decisión de la municipalidad de revocar la patente concedida a la actora, habría sido considerada en sede jurisdiccional arbitraria o ilegal y si de ello se habrían producido perjuicios a la demandante, efectivamente.

NOVENO: Que la copia de fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 23 de octubre de 2018, en causa Rol I.C. N°283-2018, agregada al expediente digital con fecha 5 de junio de 2019, no objetada, permite a este tribunal establecer que el rechazo de la municipalidad demandada para dejar sin efecto el acto por el cual revocó la patente que antes había otorgado a la actora, se estimó por el tribunal de alzada, como un acto de facto y que no respetaba el mandato legal y procedimiento para invalidar actos administrativos, dejando sin efecto, por tanto, la decisión contenida en la Carta N°375/2018 de la Jefa de Patentes del citado municipio. En la misma sentencia se ordenó a la Municipalidad de Huechuraba que debía proceder a tramitar con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 13 y 53 de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos,



lo concerniente a la patente N°281229, otorgada a la demandante en calidad de microempresaria.

DÉCIMO: Que la copia de Ordinario N°2099-2019, agregada al expediente digital con fecha 6 de noviembre de 2019, en folio 23, no objetada, a la cual se acompaña el Memo N°2 de 2019, de la inspectora municipal doña Ruth Arroyo Taipe, solo permite establecer a este tribunal, que se informó por dicha funcionaria, el mismo día 6 de noviembre de 2019, que a esa fecha no había solicitud de clausura para el local de la actora, de calle Berta Correa N°1791, casa 83, Condominio Hacienda de Huechuraba, que no habían deudas pendientes de la patente, ni existían inspecciones de fiscalización a ese lugar. Tal informe, no da cuenta que la actora haya seguido trabajando en su microempresa familiar, con posterioridad a la revocación de la patente que había dispuesto la demandada a través de un acto administrativo ilegal.

UNDÉCIMO: Que, según lo declarado por la única testigo de la demandada, administradora del Condominio donde se ubica la microempresa familiar de la actora, al año 2019, solo puede concluirse un mero indicio de que la demandante habría seguido trabajando durante el periodo del año 2018, cuando se había dispuesto la cancelación de la patente por la demandada.

DUODÉCIMO: Que la verdad es que la prueba de la demandada, ha resultado absolutamente insuficiente para poder justificar que la actora siguió ejerciendo actividad durante el periodo que medió entre la decisión, revocada, de la entidad



municipal y hasta la decisión jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, no dando cuenta cabal de tal circunstancia la única testigo de esa parte, quien reconoce haber tomado la administración, recién, en 2019.

DÉCIMO TERCERO: Que de acuerdo a lo establecido precedentemente y habiéndose asentado en la decisión jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuestión que, por lo demás, no ha resultado controvertido en el proceso, en cuanto a haberse decidido la revocación de la patente comercial concedida a la actora y que se informó a la contribuyente que estaba impedida de continuar con el ejercicio de su actividad económica, resulta de manifiesto y debe presumirse así por este tribunal, que la demandante no pudo realizar tal actividad entre la época que medió entre la orden municipal que pretendía revocar la patente y la época en que quedó ejecutoriada la sentencia de la corte, esto es, el 15 de noviembre de 2018.

DÉCIMO CUARTO: Que las boletas de honorarios acompañadas por la actora al proceso digital, con fecha 4 de noviembre de 2019, en folio 20, no objetadas, y éstas en relación al reconocimiento de haberse concedido patente comercial a ésta, en su oportunidad, por la Municipalidad de Huechuraba, permiten establecer, que ella ejerció su actividad, al menos, desde el 30 de marzo de 2018 y hasta el 18 de mayo del mismo año. Tales antecedentes permiten establecer, también, un indicio grave respecto de los ingresos que habría percibido en ese



periodo, la actora, por la explotación de su microempresa familiar.

DÉCIMO QUINTO: Que las copias de boletas, facturas y comprobantes de pago, incluido el pago de patente ante la municipalidad demandada, agregadas al expediente digital con fecha 4 de noviembre de 2019, en folio 20, no objetadas, constituyen un indicio de los gastos que habría efectuado la demandante, por insumos necesarios para poner en marcha y poder operar su microempresa familiar, consistente en un centro de estética.

DÉCIMO SEXTO: Que las copias de bono de atención ambulatoria y de órdenes de exámenes, agregados al expediente digital con fecha 4 de noviembre de 2019, en folio 20, no objetadas, solo permiten establecer un indicio en cuanto a haber solicitado la actora una consulta médica y de haberse requerido a ésta la realización de una serie de exámenes médicos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que las copias de libro contable, detalle de ingresos y de carpeta tributaria en Servicio de Impuestos Internos, agregadas al expediente digital con fecha 4 de noviembre de 2019, en folio 20, no objetadas, permiten confirmar que la actora ha realizado actividad de su microempresa, durante el periodo que se extiende entre el 30 de marzo de 2018 y el 27 de mayo de 2018; como también, establecer un indicio grave de los ingresos que habría percibido



por dicha actividad la actora, durante ese mismo periodo, y durante el año 2019.

DÉCIMO OCTAVO: Que el informe pericial practicado en autos, por el perito contador auditor, don Ernesto Aburto Guarda, agregado al proceso con fecha 10 de febrero de 2020, en folio 36, no objetado y que no ha resultado desvirtuado por prueba en contrario, realizado por un experto en materia contable y cuyas apreciaciones resultan coherentes con la documental acompañada por la actora, permiten presumir a este tribunal que los gastos de instalación y puesta en marcha del salón de estética de la actora, ascendieron a \$4.895.482; que la actora percibió ingresos, en marzo de 2018 de \$61.470, en abril de 2018 de \$1.810.510 y en mayo de 2018 de \$1.343.190, siendo el promedio diario de venta de todo ese periodo de \$66.983; que la actora no presenta ingresos durante los meses de junio a diciembre de 2018, ambos incluidos; y que de acuerdo al promedio de venta diario por los siete meses de inactividad, podría haberse percibido ingresos por un total de \$11.722.025.-

DÉCIMO NOVENO: Que, en atención a los hechos reconocidos en el proceso y la prueba analizada precedentemente, deben tenerse por acreditados en autos, las siguientes circunstancias:

1.- Que es efectivo que se otorgó a la actora, con fecha 9 de abril de 2018, la patente comercial Rol N°281229, según Resolución N°126/2018;



2.- Que la demandada remitió a la actora, Carta N°375/2018, de 10 de mayo de 2018, donde informó la revocación de la patente comercial concedida;

3.- Que la actora dedujo un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en Rol Ingreso Corte N°283-2018, donde se revirtió la decisión administrativa de rechazar el reclamo efectuado por la actora;

4.- Que la sentencia de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, quedó ejecutoriada con fecha 15 de noviembre de 2018;

5.- Que la decisión de la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto la revocación de la patente, cuyo acto estimó ilegal, se fundó en la forma del acto ejecutado por la demandada, la que no cumplía con las formalidades previstas en la Ley 19.880;

6.- Que al día 6 de noviembre de 2019, no había solicitud de clausura para el local de la actora, de calle Berta Correa N°1791, casa 83, Condominio Hacienda 6 de Huechuraba, y que la patente se encuentra vigente;

7.- Que la demandante no pudo realizar la actividad de su microempresa, en la época que medió entre la orden municipal que pretendía revocar la patente, de 27 de abril de 2018 y la época en que quedó ejecutoriada la sentencia de la corte, esto es, el 15 de noviembre de 2018;



8.- Que la actora ejerció su actividad micro empresarial, al menos, desde el 30 de marzo de 2018 y hasta el 27 de mayo del mismo año;

9.- Que los gastos de instalación y puesta en marcha del salón de estética de la actora, ascendieron a \$4.895.482;

10.- Que la actora percibió ingresos, en marzo de 2018 de \$61.470, en abril de 2018 de \$1.810.510 y en mayo de 2018 de \$1.343.190, siendo el promedio diario de venta de todo ese periodo de \$66.983;

11.- Que la actora no presenta ingresos durante los meses de junio a diciembre de 2018, ambos incluidos; y

12.- Que de acuerdo al promedio de venta diario que tuvo la actora, hasta mayo de 2018, podría haberse percibido ingresos por un total de \$11.722.025, por los siete meses de inactividad en que no presenta ingresos.

VIGÉSIMO: Que el régimen de responsabilidad de la demandada, se encuentra contemplado, en primer término, por nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 38, el cual dispone: *“Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.*



Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.”

VIGÉSIMO PRIMERO: Que el artículo 4° de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, contempla lo siguiente: *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.”*

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a su vez, el artículo 42 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, previene: *“Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio.*

No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal.”

VIGÉSIMO TERCERO: Que el artículo 152 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece, en lo pertinente, lo siguiente: *“Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio.”*



VIGÉSIMO CUARTO: Que resulta evidente de las normas constitucionales y legales transcritas, que los órganos del Estado y entre éstos, las Municipalidades, deben responder por los perjuicios que causen a los particulares por la falta de servicio, entendiendo dicha falta de servicio, una inejecución de la actividad del órgano o una deficiente actuación del mismo, siendo responsable, en tal caso, de los daños que haya provocado por ese motivo.

VIGÉSIMO QUINTO: Que resultando evidente, en la circunstancia de autos, que se ha producido una falta de servicio de la demandada, con motivo de la actuación ilegal de ésta, declarada por un tribunal de la república, al haber intentado revocar la patente comercial concedida a la actora, en una forma no adecuada a la Ley, deberá verificarse, a continuación, si de tal falta de servicio se han derivado los perjuicios que ha demandado doña Jenny del Carmen, Pero Espinoza.

VIGÉSIMO SEXTO: Que el daño emergente reclamado, denominado por la actora como daño directo, por la suma de \$2.000.000 y que corresponde a insumos y costos de arreglos del espacio ocupado para el salón de estética de ella, que, si bien es cierto, ha sido justificado en autos, conforme al peritaje realizado en autos, la verdad es que no podrá considerarse como un perjuicio padecido por ella, con motivo de la falta de servicio de la demandada, ya que tales gastos son evidentemente, propios y necesarios para la actividad económica que pretendía la demandante, no imputables a la Municipalidad



de Huechuraba, por lo cual, resulta improcedente la demanda en este punto y deberá rechazarse tal pretensión.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en lo relativo al lucro cesante demandado, encontrándose acreditado que la actora no pudo ejercer su actividad por un periodo de siete meses, por la revocación ilegal que había dispuesto la demandada, de la patente comercial de aquella; y que antes de dicho impedimento, la actora percibía un ingreso diario de su microempresa ascendente a \$66.983, por lo cual podría haber percibido ingresos por un total de \$11.722.025, en los 175 días factibles de actividad de ese periodo, según informe del perito contador designado en autos, cabe estimar entonces, que ella ha padecido, efectivamente, una pérdida de ganancias, por dicha suma, debiendo acogerse la demanda de indemnización de perjuicios, en lo referente a dicho ítem.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que la actora ha demandado, también, un presunto daño moral, que le habría provocado la interrupción de su actividad y tener que ejercer acciones legales y constitucionales, en un presunto periodo de crisis financiera familiar.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, sin embargo, no se ha acreditado de modo alguno por la actora en este juicio, la supuesta crisis financiera en que se habría encontrado, durante el periodo de inactividad de su salón de estética, ni tampoco, en particular, que haya padecido o se haya manifestado alguna forma de dolor emocional, físico o psicológico, por ese motivo,



habiendo acompañado al proceso, únicamente, un comprobante de consulta médica, pero que no da cuenta del motivo de la consulta o de la eventual afectación que hubiere tenido.

TRIGÉSIMO: Que, así las cosas y de acuerdo a lo asentado en las motivaciones precedentes, este tribunal estima, que no ha resultado probado suficientemente, el daño moral reclamado en la demanda, considerando que el solo hecho de no haber podido la actora realizar su actividad durante un periodo de siete meses, no implica, necesariamente, que se le haya producido algún tipo de afectación emocional o de otro tipo que pudiera implicar daño moral, considerando, especialmente, que no todas las personas sienten o sufren del mismo modo, ocurriendo, incluso, que a algunas personas no les afectaría mayormente tal circunstancias, más allá de un mal rato o enojo pasajero.

Consecuentemente, no podrá acogerse la demanda por concepto de daño moral, por falta de acreditación del mismo.

TRIGESIMO PRIMERO: Que, conforme a lo razonado en todas las motivaciones precedentes, deberá acogerse la demanda de indemnización de perjuicios deducida, pero limitada, solamente, al lucro cesante demandado, por la suma única y total de \$11.722.025. En lo demás, deberá rechazarse la pretensión indemnizatoria de la actora.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que la demás prueba rendida, no detallada o considerada especialmente, no incide en lo asentado en las motivaciones anteriores.



TRIGÉSIMO TERCERO: Que los reajustes e intereses que procedan calcularse, sólo serán exigibles, a contar que la sentencia quede firme y ejecutoriada, por cuanto solo a partir de esa fecha resultara exigible la obligación para la parte demandada.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, en todo caso, no se condenará en costas a la demandada, por no haber resultado totalmente vencida y estimarse la existencia de motivo plausible para litigar de dicha parte.

Por estas consideraciones, normas citadas, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 160, 170, 254 y siguientes, 342, 384, 399, 426 del Código de Procedimiento Civil; 1437, 1556, 1698, 2314 del Código Civil; 1°, 4°, 6°, 7° de la Constitución Política de la República; y 151 letra i) de la Ley de Municipalidades, se declara:

Que **se acoge** la demanda de indemnización de perjuicios deducida en lo principal del escrito de 5 de junio de 2019, solo en cuanto se condena a la demandada a pagar la suma única y total de \$11.722.025, por concepto de lucro cesante, más reajustes e intereses a contar que quede ejecutoriada la presente sentencia, sin costas. En lo demás, se rechaza la demanda.

Anótese, regístrese y notifíquese.



Pronunciada por doña Cecilia Pastén Pérez, Juez Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art.162 del C.P.C. en Santiago, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Acb.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>